

**JUICIO: GIMENEZ LILIANA ESTER C/ HERRERA MARIO ALBERTO Y
OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. C. 116/22.-**

EXCMA. CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL COMÚN. Sala II.-

Vienen las presentes actuaciones al Ministerio Público Fiscal por el recurso de apelación interpuesto.

I.- Mediante resolución de fecha 14.10.2024 el magistrado de grado resolvió: "I°)- DECLARAR la incompetencia material de este Juzgado en lo Civil y Comercial Común, conforme lo considerado. II°)- Secretaría, proceda a remitir las presentes actuaciones a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo que por turno corresponda, por intermedio de Mesa de Entrada Civil".

II.- Ante dicha resolución, y en fecha 23.10.2024, la actora interpuso recurso de apelación.

En lo que es materia de opinión fiscal, en su memorial expresó que: i) El juez interviniente fundó su decisión jurídica en el Art. 32 de la LOJP y en la jurisprudencia sentada en el caso "Ovejero Hortensia del Carmen vs. Noguera Alberto Miguel y Otros s/Daños y Perjuicios", los cuales - sin hesitación alguna - resultan inaplicables a este caso; ii) La conclusión precitada se erige por cuanto esta litis no se encuentra integrada con la Municipalidad de Famaillá; y el artículo precitado y la jurisprudencia alegada refieren a la integración de la litis con un ente estatal municipal (lo que no ocurre en este proceso conforme su situación procesal); iii) No es dable aseverar que el conductor del vehículo asegurado revista el carácter de empleado público, ya que para ello debe haber existido un acto administrativo que así lo declare, y ello no consta en autos; y iv) Insistir en la incompetencia del juez civil es conculcatorio del debido proceso legal, de la garantía del juez natural y de la tutela judicial efectiva.

III.- En estas condiciones vienen las actuaciones para dictamen de esta Fiscalía.

Conforme lo establecido por el art.102 del C.P.C.C. para la determinación de la competencia corresponde -en principio- tomar en cuenta la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda, y los hechos en que se funde.

Surge la demanda interpuesta que la presente acción, resulta ser una relación jurídica entre la actora y el demandado (conductor del vehículo siniestrado) beneficiario del seguro amparada por la 24240; y que si bien la aseguradora, reconoció el contrato de seguro con el propietario del vehículo que protagonizó el siniestro, declinó la cobertura porque al momento del accidente el conductor conducía en estado de ebriedad y no tenía el carnet habilitante conforme a su categoría.

Si bien para determinar si se trata o no de un caso contencioso administrativo, debería dilucidarse si el hecho generador de la responsabilidad se produjo con motivo o en ocasión del ejercicio de la función administrativa, lo cierto es que de las constancias de la causa no surge ningún elemento que

permita afirmar que en el momento del accidente el vehículo propiedad de la Municipalidad se encontraba afectado a la realización de sus cometidos específicos.

Asimismo, si lo que se pretende es la reparación de los daños y perjuicios sufridos a raíz del impacto que habría ocasionado el rodado de presunta propiedad de la municipalidad demandada, ya que no existe en auto documentación que lo acredite; e imputándosele responsabilidad al Sr. Herrera, quien además estaba conduciendo en estado de ebriedad; sólo cabe concluir que se trata de una cuestión regida por el Código Civil, en los términos del art. 68 inc. 1º de la LOPJ

En este contexto, a criterio de este M.P.F. no encontrándose acreditado el presupuesto determinante para definir la competencia contencioso-administrativa, se impone la revocatoria de la resolución impugnada.

IV.- Por lo expuesto, estimo corresponde HACER LUGAR a la apelación interpuesta contra la resolución de fecha 14.10.2024. TAL MI DICTAMEN.-----
FISCALIA DE CAMARA CIVIL, CONCEPCION, 10 de diciembre de 2.024.-----

ROMERO

Ana Sofia

Firmado

digitalmente por

ROMERO Ana Sofia

Fecha: 2024.12.10

11:10:59 -03'00'